

Grupo de trabajo: Bolivia. Reconfiguración política y liderazgos en disputa.

Área III. Actores Políticos

Bolivia: la persistencia del clivaje territorial

Franz Flores Castro¹, Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca

Joaquín Flores Soza², Universidad Católica Boliviana

Resumen

En noviembre de 2019, Luis Fernando Camacho y Antonio Pumari ingresaron a Palacio quemado, portando una biblia y una carta de renuncia de Evo Morales. Era el epílogo de un largo conflicto iniciado al día siguiente del verificativo electoral de octubre de 2019 donde la gente en las ciudades salió a denunciar fraude cometido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que derivó en la renuncia de Morales a la presidencia el 10 de noviembre. Ambos líderes no eran miembros de partido político alguno, sino presidentes de sus entidades territoriales como el Comité Cívico Pro Santa Cruz (CCPSC) y del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), instituciones de representación regional de larga data que habían activado un clivaje centro periferia que tuvo su desemboque en las elecciones de 2019 y los sucesos posteriores.

Con este antecedente el presente trabajo busca estudiar el clivaje territorial en Bolivia y su efecto en la reconfiguración política boliviana actual. Sostiene que ella ha estado presente a lo largo de la historia boliviana, donde las identidades territoriales siempre han sido importantes.

Palabras clave: clivajes territoriales, políticas de identidad, democracia, Potosí.

¹ Franz Flores Castro. Doctor en Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos por FLACSO Ecuador. Profesor-investigador en la USFX de Chuquisaca. Sus áreas de trabajo son democracia, partidos políticos y clivajes territoriales. Entre sus recientes publicaciones se encuentran "Bolivia: elecciones presidenciales y legislativas 2019 en un contexto de debilitamiento de la democracia", en *América Latina Vota (2017-2019)*, dirigido por Manuel Alcántara y aparecida en 2020 bajo el sello Tecnos. En 2021 publicó el capítulo "Bolivia: el Poder Legislativo boliviano en tiempos de pandemia y reconfiguración política", en *Los parlamentos en América Latina en tiempos de pandemia*, dirigido por Mercedes García, Melany Barragán y Manuel Alcántara y publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. En 2022 coordinó el libro *Las ciudades votan: las elecciones subnacionales en 2021 en Bolivia*, publicado por la USFX y la UMSA. En el mismo año publicó el libro *El esplendor inútil. Potosí ante el Estado boliviano*. Quito: FLACSO Ecuador. E-mail flores.franz@usfx.bo

² Estudiante de Ciencia Política y relaciones internacionales de la Universidad Católica San Pablo de Bolivia. E-mail: joacoflores98@gmail.com

Introducción

En noviembre de 2019, Luis Fernando Camacho y Antonio Pumari ingresaron a Palacio quemado, portando una biblia y una carta de renuncia de Evo Morales. Era el epílogo de un largo conflicto iniciado al día siguiente del verificativo electoral de octubre de 2019 donde la gente en las ciudades salió a denunciar fraude cometido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que derivó en la renuncia de Morales a la presidencia el 10 de noviembre.

Tanto Camacho como Pumari no eran líderes de partido político alguno, sino presidentes de sus entidades territoriales como el Comité Cívico Pro Santa Cruz (CCPSC) y del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), instituciones de representación regional de larga data que habían activado un clivaje centro periferia que tuvo su desemboque en las elecciones de 2019 y los sucesos posteriores.

Con este antecedente el presente trabajo busca estudiar el clivaje territorial en Bolivia y su efecto en la reconfiguración política boliviana actual. Sostiene que ella ha estado presente a lo largo de la historia boliviana, donde las identidades territoriales siempre han sido importantes, al punto que, para el historiador Jose Luis Roca (2007) , el motor que mueve la historia de Bolivia no es la lucha de clases sino la de regiones.

En la primera parte de este trabajo veo como el clivaje desde inicios del siglo XXI ha emergido junto al clivaje étnico desde inicios del siglo XXI clivaje étnico (Faguet 2022), para luego ver como el mismo ha continuado en la crisis política de 2019 y en las elecciones de 2020. Finalmente incluyo un breve análisis prospectivo de lo que puede suceder con los liderazgos políticos en la actual reconfiguración política boliviana.

En el siglo XXI los movimientos sociales rurales comandados por Evo Morales construyeron su propuesta apelando a la reivindicación de colectividades de indígenas (Tapia 2006), frente a la demanda autonomista de la llamada Media luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) “que finalmente dieron forma a una nueva configuración política e institucional en el país” (Vergara 2015, 26).

Un clivaje es una división estructural en la vida social en torno a la que se construye una identidad y un discurso que organiza la competencia y disputa política. En la sociedad se dan varias líneas división, pero ellas solo derivan en clivaje cuando los actores, por un tiempo relativamente largo, emiten discursos y construyen organizaciones alrededor de estas divisiones, es decir dan “una expresión política organizada a lo que, de otro modo, serían creencias incipientes y fragmentarias de algún grupo social” (Kriesi 1998, 167).

Uno de los clivajes es el territorial o centro-periferia en relación con la distribución territorial del poder. La aparición del mismo es coetáneo al proceso de construcción del Estado que, en su objetivo de ampliar su poder a lo largo y ancho del territorio, va anexando regiones que antes se desenvolvían bajo otro orden político. Esto ha dado lugar fuertes resistencias de las regiones periféricas que defienden tener una identidad y una configuración política distinta a la del centro estatal. Allí donde el Estado pudo controlar eficazmente a las periferias, la distribución territorial del poder fue centralista; en cambio, allí donde las regiones fueron capaces de generar esquemas de resistencia efectiva se dio un arreglo más descentralista (Rokkan y Urwin 1982).

Ahora bien ¿Qué elementos se necesitan para que un espacio periférico construya regionalismo? podríamos señalar tres: a) un conjunto de *percepciones* que señalan las diferencias socioeconómicas entre una regiones y otras; b) Las *explicaciones* que identifican las causas y la perpetuación de la diferencias percibidas; y las c) *aspiraciones* que como un conjunto de metas y objetivos, buscan cambiar la situación, movilizan la acción y devienen en acción política organizada (López-Aranguren 1995).

Las instituciones regionalistas, las que liderizan los reclamos, varían en su forma: en algunos casos pueden aparecer en forma de partidos regionales; en otras, como organizaciones de la sociedad civil (clubes de beneficencia, centros culturales, etc) y, en otros, como grupos que controlan las instituciones políticas locales (universidad, municipio, gobernación). Lo importante, empero, es que en la periferia aparezca un actor y un liderazgo donde “la región se exprese y se configure como actor social y político capaz de aglutinar al conjunto de organizaciones locales” (Burbano de Lara 2016, 26).

Un aspecto que se debe remarcar es que detrás del juego regionalista se encuentran actores políticos y económicos con intereses específicos. La lucha regionalista si bien moviliza un discurso regional que se dice apolítica, partidaria y carente de ambiciones personales o de partido político, los que la liderizan, sus elites, tienen intereses propios. Puede darse el caso, que el actor más importante manipule y active las aspiraciones de desarrollo de una región para oponerse a un gobierno o una ideología dominante.

Un último apunte, como señala Vergara:

Aunque un clivaje es una estructura de competencia permanente, sus manifestaciones no son idénticas en el tiempo. Mas bien. El clivaje constituye un arco, un acordeón que puede pasar por momentos de expansión muy activa o de retraimiento (Vergara 2015, 23).

A esto se podría agregar que los clivajes no aparecen en estado de pureza ni se presentan como tales a lo largo del tiempo. Si bien pueden tener como base el clivaje original, por su propia necesidad las elites que los activan pueden tomar a su favor otros clivajes para dar mayor fuerza y ampliar el margen de irradiación de sus demandas.

El clivaje territorial entre 2000 y 2016

El clivaje territorial apareció en la crisis de Estado por la que pasó Bolivia entre el 2000 y 2009. El caso de Santa Cruz es el más notable puesto que en este departamento se habían realizado una serie de acciones colectivas liderizadas por su comité cívico pro intereses de Santa Cruz (CCPSC) que postulaban la puesta en vigencia de autonomías departamentales como proyecto contrario al que se gestaba en la parte occidental del país liderizada por Santa Cruz.

Pero no fue el único. En la ciudad de Sucre, sede de la Asamblea constituyente (2006-2008) se había dado una serie de protestas que buscaban colocar en la agenda de debate el asunto de retorno de los poderes ejecutivo y legislativo a la ciudad de Sucre. Una demanda añeja, que venía de 1989 a raíz una guerra civil entre los liberales de La Paz y los conservadores de Sucre, que había terminado con el traslado de los poderes del estado a La Paz, fue reactualizada por las elites políticas locales que, agrupadas en torno al Comité Cívico de los Intereses de la Capital (CODEINCA) desarrollaron acciones colectivas a tal punto

multitudinarias y radicales que terminaron por bloquear las sesiones de la Asamblea Constituyente, misma que terminó sus sesiones en la ciudad altiplánica de Oruro (Centellas 2010; Flores 2012).

A raíz de estas acciones tanto el CCPSC como Codeinca fueron duramente atacados con juicios y encarcelamiento a los líderes de la movilización. Codeinca nunca más logró levantar cabeza y en muchos casos fue tomada su dirección por personajes afines al partido oficialista.

El caso del departamento de Potosí contrasta con los ya señalados. Desde la aparición del liderazgo de Evo Morales, fue uno de sus bastiones electorales del MAS. Para las elecciones presidenciales del 2002, este partido obtuvo un 27,02 % del electorado potosino, este porcentaje subió para las elecciones de diciembre de 2005 donde el MAS logró el 57,8 % de los votos, seguido de Podemos con 25,7 %. En virtud de ese resultado, el MAS obtuvo dos senadores de tres posibles y 10 diputados de 12 en juego. (OEP 2021).

En consonancia con el MAS, Comcipo rechazó el pedido de autonomías departamentales respaldadas por Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija tildándolos de separatismo y de estar manipulados por oligarquías terratenientes.

Todo esto cambio abruptamente en 2010. El 29 de julio se inició una huelga general con bloqueo de caminos con varias demandas postergadas que mostraban claramente la aparición de un clivaje territorial en el departamento de Potosí. La larga protesta, que llegó a durar 19 días, estaba acompañada de una permanente referencia a la opulencia y esplendor del pasado potosino cuyo Cerro Rico que había sido la fuente de donde manó la riqueza tanto para España en como en la nueva república de Bolivia desde 1825. Este discurso unió a todos los potosinos bajo la consigna de no permitir más ser la región que lo da todo sin percibir nada. Es una movilización que traspasa todos los otros marcos de divisiones de clase, políticas, y étnicas. Conforman la huelga todas las personas sin diferencia alguna: los trabajadores comerciantes como los trabajadores mineros cooperativistas, las clases altas como las trabajadoras sexuales, los mayores como los jóvenes. La identidad regional, claramente puede traspasar todas la otras divisiones porque la identidad territorial es poderosa, puesto que tiene la misma fuerza que la apelación a la nación como aparato de legitimación política (Anderson 1993).

Este sentimiento de postergación no era casual. Para 2010 los indicadores económicos en Potosí no podían ser más preocupantes. El censo de población y vivienda de 2012 señaló que la población de Potosí había crecido a un ritmo de 6,7% cuando en los departamentos prósperos este indicador llegaba a los 35,2 en Santa Cruz, a 20,7% en la Paz y a 17,2 en Cochabamba (INE, 2019, 35). La diversificación productiva prometida por Morales estaba lejos de ser concretada. En el mismo año, el 41,3% del Producto departamental estaba concentrado en la minería a mucha distancia del 4,3% de participación de las industrias manufactureras y del 1,9% de la actividad turística (Ferrufino, Eróstegui y Gavincha, 2011, 44). Lo que reflejaba la absoluta desarticulación de la minería con otros sectores. La industria manufacturera representaba solo el 3% de todo el país, con el añadido que producía casi exclusivamente para el mercado potosino. Al mismo tiempo, en 2009, Potosí solo había recibido el 6,4 % de la inversión pública para salud y seguridad social del total nacional y el 5,5% para saneamiento básico (Ferrufino, Eróstegui y Gavincha 2011, 60).

Estaba claro que la bonanza minera no generaba grandes cambios en la situación de la región que, en realidad, mostraba abandono y pobreza. En otros términos, los potosinos podían constatar objetivamente que su riqueza minera no cambiaba para nada su situación y perspectivas de vida. Cuando se iniciaban millonarios proyectos mineros en el Cerro Rico, los representantes de las transnacionales prometieron la instalación de una industria de platería ornamental, apoyo al turismo, programas de asistencia social en salud y educación que beneficien a mineros cooperativistas y la población local (Madrid y Camacho, 2003: 87). Hasta el día de hoy nada de esto se ha cumplido.

El decurso del conflicto de los 19 días hizo cambiar completamente las coordenadas de la votación sobre todo en la ciudad de Potosí que, de apoyar a candidatos del MAS de pronto les negó su voto en las sucesivas elecciones.

Cinco años después, en 2015, se realizó otra movilización de similares características. La misma se prolongó por 29 días con bloqueo de calles y caminos que mantuvieron aislada a la región. Empero, el punto de presión al gobierno no estuvo en Potosí sino en la ciudad de La Paz, donde se realizaron marchas que intentaban día a día ingresar a plaza Murillo lugar del despacho presidencial. Luego de una violenta marcha donde mineros cooperativistas de

base causaron zozobra al hacer estallar cachorros de dinamita, el gobierno aceptó entrar a la negociación. Finalmente, a fines de julio de 2015 se dió fin al conflicto, nuevamente con solo promesas del gobierno. La numerosa cantidad de movilizad@s potosinos que estuvieron en las jornadas de lucha en La Paz, volvieron a Potosí donde gozaron de un recibimiento de héroes. La gente los abrazaba, los santiguaba, los aplaudía, les daba comida y les agradecía por haber recuperado, otra vez, la dignidad potosina.

De esta manera, se dejó de lado la postura que afirmaba que la postergación de Potosí se debía a la apatía e indiferencia de los potosinos. Las dos huelgas, las marchas y ayunos, el apoyo que los residentes potosinos en La Paz habían brindado a los marchistas que llegaban de Potosí, demostraron que lo que menos existía en los potosinos era indiferencia con la suerte de su región. Al contrario, habían desafiado al gobierno "abusivo" de Morales, no aceptando sus presiones y combatiendo en las calles y caminos para hacer oír su voz.

A partir de ese momento, toda la explicación sobre la situación de Potosí, tuvo como exclusiva referencia al gobierno del MAS. Si se daba un retraso económico y social, si no existía diversificación económica ni productiva, si las obras estaban mal ejecutadas, si se saqueaba nuevamente los recursos naturales potosinos, si se permitía la destrucción del cerro Rico, si había contaminación y desorden en la ciudad, todo esto se debía al gobierno del MAS. Era un discurso que ya se manejaba antes, pero que ahora formaba parte del sentido común.

El clivaje territorial en 2019

2016 fue un año clave para la política boliviana. El 21 de febrero se realizó un referendo constitucional para consultar sobre un cambio que permita la habilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera a una nueva postulación. El proceso se realizó en un ambiente de polarización con un gobierno cuya vocación reeleccionista le era cada vez más difícil de justificar y un conjunto de partidos, movimientos cívicos (entre ellos Comcipo), y organizaciones ciudadanas a los que unía la consigna de no permitir el prorrogismo de Morales. Realizado el conteo de los votos, ganó la opción del No con el 51,34% de los votos frente al 48,66 del Si (OEP 2021).

Los resultados de esta consulta mostraron la fractura entre varios departamentos y el MAS. El No ganó en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca y Potosí confinando al voto por el Si a solo los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba.

En Potosí triunfó la opción del No con un 53,26 % de los votos frente a un 46,74% por el Si. La otrora plaza fuerte del masismo se debilitaba. El respaldo al No se centró en la ciudad de Potosí, donde llegó al 85,87% de los votos y el apoyo a la opción oficialista del Si al 14,13% (OEP 2021). La ciudad de Potosí que había recibido fuertes reveses en sus movilizaciones regionalistas de 2010 y 2015 tuvo la oportunidad, en el referendo constitucional, de 2016 de mostrar que sus simpatías políticas habían cambiado de manera drástica.

Aquí cabe reflexionar sobre el rol de las elites. Como se sabe son las elites políticas las que activan un clivaje, en el caso cruceño se trata de las elites sociales y económicas que en 2019 aúnan un discurso de la defensa de la región con la defensa de la democracia. En el caso potosino ocurre lo mismo, quienes activan este discursos y lo sostienen, son los grupos subalternos como comerciales o trasportistas públicos, trabajadores de la universidad y estudiantes.

Entretanto el gobierno se centra en legalizar la candidatura de Morales a un nuevo mandato. Este se viabiliza el 2017 cuando el tribunal supremo de justicia decide dar via libre a su cuarta postulación bajo el argumento de que no hacerlo significaría atentar contra sus derechos humanos. Esto provoca que desde los comités cívicos y también desde las plataformas ciudadanas se organicen varios actos de repudio a la cuarta repostulación de Morales. De alguna manera ya no solo son acciones de Comités sino de buena parte de la población que, de manera muchas veces espontánea, protesta contra la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional TCP. Es el momento en que el 21 de febrero se convierte en una fecha para recordar el triunfo de la democracia contra la dictadura de morales, y es el momento en que se logra que las fuerza ciudadanas o si se quiere la oposición no partidaria alcancen mayor legitimidad. En suma "la capacidad hegemónica del MAS llegó a su fin porque la noción de democracia fue desarticulada de su discurso y dotada de valores distintos a los que el MAS propugnó y aprobó en la Asamblea Constituyente" (Mayorga 2020, 21) .

Finalmente se llega a las elecciones de 2019. La oposición ha logrado insertar otra división política en la sociedad que es dictadura versus democracia, que organiza los discursos de los actores contrarios al MAS. La agenda de los intereses territoriales de cada una de las regiones va dando paso a la defensa de lo que se llamó un “bien mayor” como la de los derechos ciudadanos, de la democracia contra la emergencia de la dictadura. Esto logra aunar a los variopintos actores opositores, pero sobre todo a la misma ciudadanía urbana y de clase media, que fuera de toda filiación partidaria o fuera de toda identidad de clase o étnica denuncia la impostura de la candidatura de Morales.

El éxito del posicionamiento de la contradicción masismo-antimasismo logró anular las narrativas políticas del oficialismo, que intentaba posicionar las dicotomías nacionalismo- antiimperialismo (Agirakis 2022, 176), a tal punto que, “el discurso de *defensa de la democracia* se convirtió en un significativo vacío que movilizó a la población y articuló a una diversidad de sectores sociales/ciudadanos y demandas dispersas, lo que precipitó una crisis política sin precedentes en los 14 años de Gobierno del MAS” (Zegada 2022, 196).

Aunque los clivajes según la literatura son divisiones persistentes que se dan en la sociedad, aquí lo que vemos es una sorpresiva mutación de los clivajes étnicos y territoriales y la aparición de otro que divide dictadura con democracia. Este es un gran triunfo opositor, primero porque logra quitar la adhesión y respaldo político de la clase media y ciudadana al proyecto de Morales y luego logra unir el voto contra Morales a partir del voto a favor del candidato con mayor capacidad para enfrentar al oficialismo en las urnas.

Adicionalmente, dos acontecimientos son claves en este asunto, el primero de ellos es que dos entre julio y agosto de los 2019 se suceden varios incendios en el territorio cruceño que el gobierno es incapaz de resolver. Este repudio es canalizado por el CCPISC, que organizó cabildos cada vez más multitudinarios que por una parte repudian la inacción del gobierno pero donde se aprovecha para pedir el voto contrario a Morales.

Por su parte el Comcipo aprovecha la discusión y firma de una ley de explotación del litio como nuevo caballito de batalla de Comcipo, para generar malestar hacia el gobierno y que lo lleva a convocar a una huelga general e indefinida.

Potosí llega a las elecciones de octubre de 2019 con una ciudad que está en plena efervescencia regionalista por la defensa de litio alojado en su territorio una protesta que también se engarza con la defensa de la democracia.

En efecto, una vez realizadas las elecciones fallidas de 2019, se comprobó que el voto útil había alimentado el respaldo a Comunidad Ciudadana (CC) con su candidato Carlos Mesa. CC había ganado en la mayoría de las urbes y de manera sorpresiva en el departamento de Santa Cruz, que siempre habían votado en contra de un candidato nacido "kolla" o nacido en la parte occidental del país.

Aunque no se tienen datos oficiales de las elecciones dado que las mismas se anularon, las noticias que se divulgaron por los medios de comunicación señalan que en casi todas las mesas de la ciudad de Potosí, la opositora Comunidad Ciudadana (CC) había vencido al MAS.

Las primeras informaciones que se conocen dan una victoria para la candidatura de Morales. Empero la diferencia con su inmediato seguidor Carlos Mesa no fue de 10 puntos porcentuales por lo que se daba por descontada la realización de una segunda vuelta electoral. Empero, el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) es suspendido de manera abrupta la noche del día de la votación, extremo denunciado por las fuerzas opositoras. 23 horas después el TREP volvió a funcionar para hacer conocer la noticia oficial de que Morales había ganado con más del 10% respecto de CC, que lo hacía ganador en primera vuelta.

Ese hecho fue el inicio de una escalada de protestas, con miles de personas saliendo a la calle en diferentes ciudades de Bolivia, y un saldo de tres oficinas de los tribunales departamentales electorales arrasadas por el fuego. A esta situación se sumó el miércoles 23 de octubre un paro nacional indefinido convocado por los comités cívicos, seguidamente todo vino en cascada: el amotinamiento de la policía el viernes 8 de noviembre y la "sugerencia" del jefe de las Fuerzas Armadas a Morales para que renunciase y, finalmente, la renuncia de este y de su vicepresidente, Álvaro García, el 10 de noviembre y su posterior asilo en México.

Empero todas estas protestas carecen de liderazgo y de proyecto político. Si bien son multitudinarias no se puede decir que sean organizadas por algún actor

de la oposición y si bien son fuertes y contundentes con saldos muchas veces trágicos no responden a un proyecto político que no sea la salida de Morales del poder. Si bien quienes aparecen son los líderes más visibles de la son los líderes del comité cívico cruceño Luis Fernando Camacho y el potosino Marco Pumari ellos solo aumentan el grado de beligerancia de los movilizados pero nunca tener o poder asumir su dirección política.

Esto se debe a que el discurso regionalista y por supuesto de su líderes tiene el gran problema de no poder salir de su espacio departamental para lograr una visibilización nacional o un liderazgo nacional. Por su propia naturaleza, los comités cívicos defienden el espacio territorial subnacional y no pueden trascender a nivel nacional. Su proyecto es local, no nacional y esa es su fuerza pero también su limitación. Por ejemplo, muchos de los candidatos presidenciales cruceños han sido de una u otra manera líderes del comité cívico, pero nunca han podido lograr fuertes votaciones en otros departamentos.

Finalmente, luego de la renuncia presentada por Morales el 10 de noviembre de 2019 a su cargo de presidente del Estado, la principal responsabilidad fue asumida por Jeanine Añez por sucesión constitucional bajo el encargo de sanear el Tribunal Supremo Electoral, y de llevar a cabo las elecciones generales en el menor tiempo posible. Empero en febrero de 2022 se decreto confinamiento a causa de la pandemia del Covid19 que postergó más de una vez la fecha de elecciones nacionales.

Una vez que las elecciones ya tienen una fecha fija, tanto Luis Fernando Camacho como Marco Pumari trataron de rentabilizar su capital político y pactaron un acuerdo para ir en binomio por el nuevo partido fundado por Camacho denominado Creemos.

No existe un respaldo masivo y militante hacia la candidatura de estos líderes cívicos. No solo que no pueden articular un discursos nacional sino que no son las personas adecuadas para hacerlo. Los liderazgos nacidos desde el clivaje territorial tienen ese problema: no pueden trascender el espacio local. Este tema es recurrente puesto que han sido varios los presidentes del comité cívico cruceño que han tratado de dar el salto desde la filas cívicas a las de los partidos políticos, sin mucho éxito. Lo mismo pasó con los varios dirigentes de Comcipo.

Además, llega a tal punto el extravío de Comcipo que empieza a articular sus acciones con actores de oposición, sobre todo con el Comité Cívico Pro Santa Cruz, dañando fuertemente su legitimidad y representatividad. Todo esto explica que, ante las elecciones nacionales previstas para 2022, Comcipo se haya convertido en apéndice de Creemos, el partido político del líder cruceño Luis F. Camacho.

Esto afectó fuertemente a Comcipo. Su cercanía a la gestión de la presidenta Jeanine Añez y la candidatura vicepresidencial de Pumari, había minado su credibilidad.

Una vez realizadas las elecciones de 2020, resultó ganador Luis Arce del MAS con el 56% de los votos. Para muchos análisis el MAS había vuelto a ganar recurriendo a su voto duro proveniente de los sectores indígenas y campesinos, que resistieron la arremetida de los sectores conservadores. Pero también se debe tomar en cuenta que el MAS no es un partido étnico (Marti i Puig 2008) sino un partido policlasista que trata de seducir el voto urbano, mestizo y de clase media. Postular a Luis Arce como candidato del MAS tuvo esta intención: volver a captar al voto urbano y de clase media que se había volcado contra Morales hasta sacarlo del poder. El discurso que se manejaba fue que Luis Arce era un profesional, docente universitario y economista que podía mantener el exitoso modelo que había dado estabilidad económica y cierto crecimiento económico al país durante 14 años.

En la ciudad de Santa Cruz de la candidatura de Camacho pudo captar el voto cruceño al punto de ganar electoralmente en este departamento, empero su votación fue muy baja en otros departamentos, lo que significa que no se pudo salir del "encierro cruceño".

Este hecho que ya había ocurrido en pasadas elecciones y, naturalmente, ocasiona un sentimiento de agravio dentro de las elites cruceñas. Santa Cruz es la locomotora que lleva el desarrollo económico pero no tiene las riendas política del país. El clivaje territorial tiene esos problemas no puede trascender políticamente más allá de la región donde emerge, ya que el clivaje territorial busca que "colectividades de individuos desean ser tratados de manera diferenciada por el Estado a partir de consideraciones territoriales".

El caso de Pumari fue a un peor, su candidatura junto a la de Camacho por Creemos aportó muy poco a la fórmula electoral. En el departamento de Potosí y gracias el voto rural volvió a ganar el MAS aunque con margen menor a las anteriores elecciones y la ciudad de Potosí optó por respaldar la candidatura de CC de Carlos mesa. Aun más, el 21 de octubre de 2020 Pumari fue abucheado por una multitud de ciudadanos potosinos que lo acusaban de haber respaldado a Camacho y por tanto de haber dividido el voto anti-MAS.

La nueva gestión de Luis Arce

En el ámbito académico, la salida de Morales ha generado un debate en torno a si ello fue o no un golpe de estado. Una parte de los que se han acercado a lo ocurrido en 2019 califican el decurso de la crisis y la salida de Morales del poder como un golpe de Estado (Mayorga, 2020;) ya que el presidente fue removido de su cargo por la presión de fuerzas externas, se rompieron las reglas de sucesión de los presidentes de ambas cámaras del Poder Legislativo y una senadora se hizo cargo del poder en un proceso inconstitucional.

Al mismo tiempo, otros análisis coinciden en que lo que sacó del poder a Morales fue una protesta popular como respuesta a una degradación gradual de la democracia desde dentro y a un proceso gradual de desinstitucionalización promovido por las autoridades electas, lo que, finalmente, erosionó la legitimidad y la legalidad del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). En otros términos, “la decisión de ignorar tanto la prohibición constitucional como el resultado de un plebiscito que le negaban la posibilidad de presentarse a una tercera reelección incentivó la movilización de la oposición (Murillo y Levitsky, 2020). En esa medida, “la violación de los límites de mandato sería clave para entender lo que pasó en Bolivia” (Arato, 2020) donde hubo una violación sistemática del orden legal parcial, que llevó a un “*reencauzamiento del Estado* en lugar de un golpe de Estado” (Barrios, 2021: 188). En la misma línea, Simón Pachano habla de un contragolpe, «entendido como una acción –ciertamente irregular, no institucional– encaminada a expulsar a un gobierno que se ha situado al margen de la ley». ³

³ Pachano en *El Universo*, “Golpe y contragolpe”, 25 de noviembre de 2019.

Para otros estudios, la participación de los militares en la política puede entenderse como un “golpe democrático” donde los militares intervienen para facilitar la causa de la oposición contra un régimen autoritario (Varol en Figueroa, 2020). Ciertamente, los policías luego de su amotinamiento, volvieron a obedecer al nuevo poder civil, lo mismo que las fuerzas militares que después de sugerir a Morales su renuncia, volvieron a los causes institucionales sin interferir en la transición y sin demarcar una agenda política. No es un dato menor que la Asamblea Legislativa plurinacional funcionara con normalidad y que, más bien, se haya convertido en un factor de bloqueo de las iniciativas provenientes del poder Ejecutivo (Flores, 2021a).

Con todo, algo que no se debe dejar de lado es que las fuerzas que reemplazaron en el poder a Morales no eran democráticas. Los militares “dejaron el control de la transición en manos de una facción política que tenía el deseo explícito de acabar con muchos de los logros democráticos de la Constitución de 2009” (Figueroa, 2020) entre ellas “retomar una política neoliberal para modificar el modelo Estado-céntrico impulsado por el MAS” (Mayorga, 2020: 2) y “reinstaurar el viejo orden, con el dominio de la oligarquía blanca, el cristianismo más conservador como culto único y el control social de una población acostumbrada a movilizarse” (Resina, 2020).

Este debate le ha servido al oficialismo para iniciar un ajuste de cuentas con los actores principales de los hechos del octubre y noviembre de 2019. En otras palabras, ha legitimado la persecución judicial y el encarcelamiento de líderes cívicos, en 12 de marzo de 2021 fue tomada presa la expresidenta Jeanine Añez; el 28 de diciembre de 2022 corrió la misma suerte el gobernador de Santa Cruz cívico Luis Fernando Camacho, y el 9 de diciembre de 2021 fue apresado el exlíder cívico potosino Marco Pumari. Todos ellos hasta ahora permanecen tras las rejas, a pesar de las protestas regionales, de los partidos políticos y de organizaciones internacionales que ven en este hecho un abuso de autoridad y una explícita politización de la justicia.

En todo caso que hayan sido apresados estos actores y no otros, como los líderes de partidos políticos, policías, militares o personas que explícitamente pidieron la renuncia de Morales en 2019, como es el caso del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), se debe a que el gobierno trata de desactivar los movimientos cívicos para poder debilitar la protestas regionales

que, como afirmamos, son focos de resistencia al oficialismo. Insisto que ellos entre 2006 y 2009 han resistido el proyecto de Estado del MAS y se han activado en lugares no previstos como los departamentos de Chuquisaca y Potosí.

Dada la fuerte persecución de que son objeto, actualmente los comités cívicos de Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca y Tarija, entre los más relevantes, están desorganizados. A raíz del encarcelamiento de Luis F. Camacho actualmente existe una crisis de liderazgo en el departamento de Santa Cruz y hay problemas de legitimidad y de legalidad en la persona que le tiene que suceder en el cargo de gobernador. Lo propio pasa con el liderazgo en la ciudad de Santa Cruz, el actual alcalde Jhony Fernández no tiene la capacidad para poder unir a la población. Incluso ha habido iniciativas de revocatoria de mandato.

El caso potosino es aún peor, el último dirigente cívico Juan Carlos Manuel, se declaró en la clandestinidad y luego de algunos meses perdió la vida. A partir de ese momento no existen movilizaciones ni pronunciamientos relevantes. Así mismo, el panorama institucional es sombrío: el gobernador del departamento y el Alcalde la ciudad guardan detención policial, el primero acusado de la compra millonaria de ambulancias y el segundo de violación y de acoso sexual.

De todos modos, que los comités cívicos estén ahora desorganizados y sin liderazgos claros, no significa de modo alguno que el clivaje territorial no vaya a ser activado en el futuro.

A manera de conclusión: factor regional en la crisis política boliviana

Hoy Bolivia vive un caos político porque no se sabe a ciencia cierta quien manda en el país, si Luis Arce o Evo Morales. Ellos han sesgado los poderes estatales con habilidad de carnicero y amenazan con hacer pedazos el Estado de derecho. Arce, ante su debilidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha decidido atrincherarse en el poder judicial y, desde ahí, levanta fiero combate con quien otrora fue su jefe y amigo. Morales ante su debilidad en el poder judicial se atrincheró con los suyos en la Asamblea y ordena bloquear cuanto ley venga de la Casa grande del pueblo, el lugar donde ahora despacha su otrora ministro estrella y ahora acérrimo enemigo.

Pero la batalla no solo se libra en los espacios institucionales, sino que se apela al número, a la cantidad. Hoy la cosa es multitud contra multitud. La rebelión de las masas arcistas frente a la rebelión de las masas evistas. Un día el bando oficialista organiza un evento multitudinario en El Alto para demostrar su fuerza, y semana después Evo organiza otro, donde muestra que los que lo apoyan no son pocos. Onerosas demostraciones de músculo político, dirigidas a convencer a un Órgano Electoral Plurinacional acostumbrado durante más de una década a obedecer a un solo jefe, y que no sabe cómo dar contento ahora que tiene dos.

Empero, en esta divergencia, hay algo que comparten Arce y Morales. Ambos se niegan a ver la realidad. Durante 14 años Morales vivió como un adolescente hijo de un padre rico que gasta el dinero como si este fuera inagotable. Por su parte Arce vive la fantasía de creer que con pocos recursos, mediocres funcionarios y con discursos se puede industrializar el país. Desgraciadamente los datos condenan a Evo y contradicen a Arce: en vez de exportar productos con valor agregado seguimos en la colonial costumbre de exportar materias primas; en vez de una burocracia eficiente tenemos un estado copado por activistas salidos de la lucha callejera, y en vez de discursos, tenemos eso, solo discursos.

Esta pelea puede ser el inicio de un proceso de reconfiguración política que haga aparecer dos facciones del MAS ya como partidos políticos diferentes, más uno o dos partidos de oposición que competirán pero que no serán competitivos. Esta reconfiguración se cristalizará en las elecciones generales de 2025, pero hasta entonces muchos conflictos tendrá que sortear el gobierno, entre ellos el avivamiento del factor regional. Me explico:

Bolivia es un país de regiones, como bien lo calificaba el destacado historiador beniano José Luis Roca (se graduó como abogado de USFX como el mejor de sus alumnos.) En este país la gente no se identifica como boliviana exclusivamente sino como cruceña, como chuquisaqueña, como potosina, como paceña, como cochala, etcétera, es decir que organiza sus proyectos políticos en referencia al territorio donde nació. Esta identidad es la base de la aparición de los comités cívicos, como canalizadores de las demandas locales, que pueden permanecer en hibernación por largos años pero nunca están desactivadas del todo.

El detonante de este reavivamiento serán los resultados del censo. Un instrumento creado para dotar de información estadística para las políticas públicas, hará explotar el regionalismo tan temido. Departamentos como Chuquisaca y Potosí verán que sólo fueron fuente de ingresos para el Estado por concepto de exportación de gas y minerales pero nunca destino de proyectos de desarrollo. Por su parte, Santa Cruz se dará cuenta, por enésima vez, que es el camión que tracciona el desarrollo del país, pero no es el que lo conduce. Para unos el agravio consistirá en ser los olvidados de las políticas estatales, para los otros será el tener el poder económico pero no el poder político.

Esto configura un escenario complejo para el gobierno, a la oposición fuerte que ha planteado Evo Morales, se suma a la protesta de las regiones que de ninguna manera aceptarían de buen grado que se les disminuya el momento que reciben por coparticipación tributaria y tampoco que se les reduzca el número de parlamentarios. En suma, los datos del censo obligarán a una fuerte reflexión en torno a lo que el MAS hizo por el desarrollo de los departamentos en más de década y media de gestión. Es seguro que continuará la existencia de un eje económico compuesto por La Paz, Santa Cruz y Cochabamba donde se realizan la mayor parte de las inversiones públicas y privadas, y otro grupo de departamentos, de menor desarrollo, cuyos habitantes al no encontrar horizontes de vida promisorios optan por migrar a otros departamentos o países.

Es de esperar que este futuro conflicto centro-periferias derive en un cambio de la agenda política que debata las autonomías departamentales, tan necesarias para el desarrollo como útiles para detener el proceso de erosión democrática. Dependerá de la lucidez del liderazgo regional para lograrlo.

Sucre, junio de 2024

Bibliografía

Arato, Andrew (2020). «Coup, Revolution, or Negotiated Regime Change What is happening in Bolivia?», *Public seminar*. Recuperado de <https://publicseminar.org/essays/coup-or-counter-revolution-in-bolivia/>

Barrios Zuvelza, Franz (2021). «El golpe que no fue. La última crisis estatal boliviana y los límites del concepto de golpe de Estado», *Revista de Estudios Políticos*, vol. 191, pp. 185-214. <https://doi.org/10.18042/cepc/rep.191.07>

Burbano de Lara, Felipe. 2014. *La revuelta de las periferias. Movimientos regionales y autonomías políticas en Bolivia y Ecuador*. Quito: Flacso.

Centellas, Miguel. 2010. "Sabina Cuellar y el nuevo regionalismo boliviano". *Revistas Perspectivas Latinoamericanas*. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/258164568_Savina_Cuellar_and_Bolivia%27s_New_Regionalism

Ferrufino, Rubén *et al.*

2011 *El Cerro nuestro de cada día. Relevancia económica en la región y ciudad capital*. La Paz: labor.

Flores, Franz. 2012. "Elites e identidades colectivas y movilización social, el conflicto por la capitalía en la ciudad de Sucre en 2007". Sucre: Investigasur.

Flores, Franz. 2022. *El esplendor inútil, Potosí y el Estado central*. Quito: FLACSO

Kriesi, Haspeter. 1998. "The Transformation of Cleavage Politics The 1997 Stein Rokkan lecture". *European Journal of Political Research*, 33: 165-185. <https://doi.org/10.1023/A:1006861430369>.

Lopez-Aranguren, Eduardo. 1995. "Las dimensiones de la conciencia regional y nacional", en *Revista Reis*. <https://doi.org/10.2307/40183863>

Madrid, Emilio y Natalia Camacho. 2003. *Negociación y toma de decisiones para comunidades mineras de Potosí*. La Paz: CEPROMIN.

Mayorga, Fernando. 2020. "Derrota política del MAS y proyecto de restauración oligárquico-señorial". En Fernando Mayorga (coord.), *Crisis y cambio político en Bolivia. Octubre y noviembre de 2019 en Bolivia : la democracia en una encrucijada*. Cochabamba: CESU Disponible en <https://biblioteca.clacso.edu.ar/Bolivia/cesu-umss/20200630024009/Crisis-cambio-politico-Bolivia.pdf>

Marti i Puig, Salvador. 2008. Las razones de la presencia y éxito de los partidos étnicos en América Latina. *Revista Mexicana de Sociología*, Mexico: UNAM

Murillo, María Victoria. y Levitsky, Steven (2020). «La tentación militar en América Latina», *Revista Nueva Sociedad*, no. 285, pp. 4-11.

OEP (Órgano Electoral Plurinacional). 2021. "Atlas Electoral Plurinacional". Base de datos (<https://bit.ly/35NiXye>).

Roca, José Luis. 1980. Fisonomía del regionalismo boliviano. La Paz: Los Amigos del Libro.

Rokkan, Stein, y Derek Urwin. 1982. *The Politics of Territorial Identity*. Londres: Sage.

Vergara, Alberto. 2015. *La danza hostil. Poderes sabnacionales y Estado central en Bolivia y Perú (1952-2012)*. Lima IEP.